

Declaración de la sociedad civil sobre la emergencia alimentaria mundial

¡Que no se repitan los “errores de siempre”!

Los gobiernos e instituciones internacionales son los responsables de los errores históricos y sistemáticos

Los gobiernos nacionales que se reunirán en Roma durante la Cumbre sobre la Crisis de los Alimentos de la FAO, deben empezar por aceptar su responsabilidad en la emergencia alimentaria actual.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, cuando se estimaba que 830 millones de personas pasaban hambre, los gobiernos prometieron reducir esa cifra a la mitad para el 2015. Muchos predicen ahora que, por el contrario, esa cifra aumentará un 50% hasta los 1.200 millones, con mayores problemas derivados del impredecible caos climático y de las presiones adicionales derivadas de la producción de agrocombustibles.

Ante el colapso de las reservas de ganado y pesca y los precios disparados de los alimentos y del combustible, se requieren nuevas políticas, prácticas y estructuras para resolver la emergencia alimentaria actual y para prevenir futuras – y mayores – tragedias. Los gobiernos, incluyendo los del Sur del globo, y las organizaciones intergubernamentales deben reconocer ahora su responsabilidad por haber aplicado políticas que han socavado la productividad agrícola y han destruido la seguridad alimentaria de los países. Por estas razones, han perdido la legitimidad y la confianza de los pueblos del mundo en que ellos puedan realizar los cambios reales, sustanciales, necesarios para terminar con la crisis de alimentos actual; para salvaguardar la disponibilidad de alimentos y ganado y para enfrentar los desafíos del cambio climático.

La emergencia actual hunde sus raíces en la crisis de los alimentos de los años 70, cuando algunos gobiernos oportunistas de la OCDE, aplicando políticas neoliberales, desmantelaron la arquitectura institucional internacional para la alimentación y la agricultura. Esta crisis alimentaria es el resultado de la negación de muchos años de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación, y de la impunidad total para las violaciones sistemáticas de este derecho. Adoptaron estrategias políticas de corto plazo que motivaron la negligencia respecto a la alimentación y la agricultura y propiciaron el escenario de la actual emergencia alimentaria.

Como consecuencia, las agencias y programas de la ONU y otras instituciones internacionales, dominadas por un pequeño grupo de países donantes, están mal dirigidas, son muy ineficaces, competitivas en vez de cooperativas, e incapaces de llevar a cabo sus (conflictivos) mandatos. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el FMI, el acuerdo de la OMC en agricultura y el paradigma del libre comercio han minado economías locales y nacionales, erosionado el medio ambiente y han dañado los sistemas locales de alimentación, llevándonos a la crisis alimentaria de hoy.

Eso ha facilitado el desarrollo de oligopolios corporativos y rápidas concentraciones empresariales a lo largo de toda la cadena alimentaria; ha permitido la especulación depredadora de mercancías y el aventurismo financiero mercantil; y ha posibilitado que las instituciones financieras internacionales y los programas bilaterales de ayuda devasten la producción sostenible de alimentos y los sistemas de subsistencia.

Movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, nos hemos reunido para establecer un nuevo planteamiento sobre el inoperante sistema global de la alimentación. Estamos desarrollando el siguiente plan de acción global para la alimentación y la agricultura y estaríamos dispuestos a discutir este plan con los gobiernos y organizaciones intergubernamentales que asistirán a la Cumbre sobre la Alimentación en Roma –(“Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial: los desafíos del cambio climático y de la bioenergía”).

Estamos preparados para trabajar con gobiernos comprometidos y organizaciones de la ONU que compartan nuestras preocupaciones y estén trabajando para resolver la emergencia alimentaria y desarrollar la soberanía alimentaria.

Declaramos el Estado de Emergencia de los Pueblos por la actual crisis de alimentos. En un Estado de Emergencia, los pueblos y los gobiernos pueden suspender cualquier medida legislativa o reguladora que pueda poner en peligro el Derecho a los Alimentos y puede asimismo abolir cualquier acuerdo privado que se considere perjudicial para la Soberanía Alimentaria. Puede cancelarse cualquier medida pública o privada que restrinja la capacidad de los/as campesinos/as y pequeños agricultores de obtener alimentos domésticos para el mercado. La cancelación de la deuda es urgente y necesaria para que el Sur del mundo pueda resolver la emergencia alimentaria en curso e inmediata. Creemos que la actual emergencia alimentaria y el presente desafío del cambio climático son razones suficientes para declarar el Estado de Emergencia.

Hacemos un llamamiento al Consejo para los Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de Justicia para que investigue la responsabilidad en las violaciones del Derecho a la alimentación y en la emergencia alimentaria de los negocios agrícolas, incluyendo los comerciantes de grano y los especuladores de mercancías. Los altos costes de los insumos agrícolas y los precios de los alimentos durante la actual emergencia alimentaria se deben, en cierta medida, a los beneficios históricos de los agro-negocios y a las acciones de los especuladores de mercancías. Deben investigarse los oligopolios y especuladores que operan a lo largo de la cadena alimentaria y deben llevarse ante la justicia las sospechas de comportamientos criminales. El Consejo para los Derechos Humanos de la ONU debe asumir las investigaciones necesarias. Los gobiernos nacionales no deben titubear, dondequiera que otros gobiernos hayan incumplido sus obligaciones internacionales, en denunciar los abusos ante el Tribunal Internacional de Justicia. En cada Estado, habría que reforzar las leyes anti-cártel y anti-monopolio. El Consejo de los Derechos Humanos debe apoyar a gobiernos para garantizar que sus políticos públicos respeten, protejan y promuevan el derecho a la alimentación adecuada, en el contexto de la indivisibilidad de los derechos.

Pedimos un cese inmediato del desarrollo de tierras para la producción industrial de agrocombustibles para coches, aviones y plantas energéticas, incluyendo los llamados de biomasa “residual”. El súbito y pronunciado aumento de la producción industrial a gran escala

de agrocombustibles amenaza la seguridad alimentaria local y global, destruye los medios de subsistencia, daña el medioambiente y constituye un factor determinante en la fuerte subida de los precios de los alimentos. Este nuevo movimiento de reservas – que convierte las tierras forestales, cultivables o para el ganado, en producciones de combustible debe ser rechazado. La Cumbre sobre la Alimentación de Roma debería respaldar la propuesta del Reportero Especial de la ONU sobre el Derecho a los Alimentos: una moratoria de 5 años para la expansión a gran escala de la producción industrial de agrocombustibles, con el fin de resolver los conflictos con la producción de alimentos, desarrollar normas para la producción de agrocombustibles y para evaluar las tecnologías propuestas para los agrocombustibles.

Reclamamos una nueva iniciativa global realmente cooperativa con la que podamos participar del todo en el proceso de cambio de políticas y corrección institucional. No permaneceremos a un lado viendo cómo los ricos y los incompetentes destruyen nuestras vidas y nuestra tierra. Lucharemos por la soberanía alimentaria, incluyendo el derecho a la comida, por la producción de alimentos sostenible y por un medioambiente sano y biológicamente diverso. Para lograr este objetivo:

1. **Reclamamos el establecimiento de una Comisión de la ONU para la Producción Alimentaria, Consumo y Comercio. Esta Comisión debe contar con una representación sustancial de productores de pequeña escala de alimentos y de consumidores marginados.** El Grupo de Trabajo de la Secretaría General, recientemente reunido, ofrece un signo político claro y bienvenido de que la emergencia alimentaria trasciende las instituciones individuales y exige una acción global urgente. Sin embargo, el Grupo de Trabajo está dominado por las instituciones fracasadas cuya negligencia y cuya política neoliberal crearon la crisis. Y aquellos que han sido perjudicados por los sistemas gubernamentales e intergubernamentales – aquellos a los que debemos alimentar y aquellos que nos alimentan – son nuevamente excluidos. El Grupo de Trabajo debería terminar su tarea al término de la Cumbre sobre la Alimentación de Roma; y la nueva Comisión, global, debe comenzar su tarea inmediatamente después.

Miembros: La Comisión se debería expandir hacia el formato establecido por la Comisión Brundtland hace 20 años, que abrió el camino para la cumbres sobre medioambiente posteriores. Al conformar la Comisión, el Secretario General debería tener en mente los resultados de la *Evaluación Internacional del Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (en inglés, IAASTD)* cuyo informe recientemente completado fue aprobado por casi 60 gobiernos, tanto como los resultados del proceso y la Conferencia de la FAO sobre la reforma agraria (CIRADR).

Mandato: El mandato de la nueva Comisión debe incluir – y obligarse a – todas las formas de producción alimentaria; todos los aspectos – e impedimentos – de alimentos sanos, adecuados, razonables económicamente y culturalmente apropiados; y un análisis completo de la cadena alimentaria teniendo en cuenta las condiciones climáticas cambiantes. La Comisión debería proporcionar un informe provisional a la Asamblea General de la ONU y a los grupos dirigentes de la FAO, FIDA y PMA para finales del 2008 y entregar el informe final a estas organizaciones, con recomendaciones, en el cuarto final de 2009.

2. **Fundamentalmente debemos reestructurar las organizaciones multilaterales involucradas en la alimentación y la agricultura.** Muchas instituciones multilaterales relacionadas con la alimentación han sido criticadas por los fallos de su gobernación y su programa. Es de notar que Evaluaciones Independientes Externas (IEE) de la FAO y la FIDA han expuesto serios defectos sistémicos. En particular, la Evaluación de la FAO muestra que los altos directivos de la FAO – aunque reconocen la necesidad urgente de cambio – no creen que los gobiernos o la institución sea capaz de cambios sustanciales. La evaluación de GCIAI (Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional) está en marcha y está exponiendo grandes errores de gobernación que no pueden resolverse dentro del marco de GCIAI. El año pasado, el Banco Mundial asumió una evaluación interna de su trabajo en la agricultura en África, y fue profunda y apropiadamente auto crítica. Esto se debe a que la sociedad civil está convencida de que el Grupo de Trabajo de la Secretaría General debe evolucionar hacia la Comisión más amplia reseñada arriba. Para facilitar el trabajo de la Comisión, la sociedad civil recomienda tres decisiones inmediatas:

- La Cumbre sobre la Alimentación de Roma sobre la Crisis de los Alimentos debe acceder a asumir una meta-evaluación de las grandes instituciones de alimentación y agricultura (FAO, FIDA, PMA y GCIAI) para finales del 2008.
- Basándose en esta meta-evaluación, el presupuesto bienal de la FAO para las conferencias regionales debería ajustarse para permitir la convocatoria de conferencias regionales sobre alimentación y agricultura, involucrando igualmente a todas las grandes instituciones multilaterales, en la primera mitad del 2009. Estas reuniones deben asegurar la activa y total participación de los representantes de los/as campesinos/as y pequeños agricultores, ganaderos y pescadores.
- Construyendo a partir de la meta-evaluación y las conferencias regionales, la Comisión – para finales del 2009 – debe entregar su informe incluyendo una nueva arquitectura para el trabajo en alimentación y agricultura de la ONU.

Aunque no se realizase la totalidad del proceso arriba descrito, estamos convencidos de que la responsabilidad de las políticas y prácticas internacionales relacionadas con la alimentación y la agricultura debe residir en un único agente dentro de la comunidad de agencias de las Naciones Unidas, en el cual debe prevalecer el principio de “una nación – un voto”.

3. **Pedimos un cambio local y global de paradigma hacia la Soberanía Alimentaria.** La producción de alimentos y el consumo se basan fundamentalmente en consideraciones locales. La respuesta a la crisis de alimentos actual y a las futuras sólo es posible mediante un cambio de paradigma hacia la soberanía alimentaria integral. Los/las pequeños/as campesinos/as, los ganaderos, los pescadores, los pueblos indígenas y otros han definido un sistema alimentario basado en el Derecho Humano a la Comida adecuada y en las políticas de producción que aumenten la democracia en los sistemas alimentarios locales y aseguren la maximización del uso sostenible de los recursos naturales. La Soberanía Alimentaria se dirige a todos los temas sin resolver identificados por la Conferencia Mundial sobre la Alimentación de 1974. Se centra en la comida para los pueblos; valora a los proveedores de alimentos; localiza los sistemas de alimentos; asegura el control comunitario y colectivo de la tierra, el agua y la diversidad genética; honra y construye conocimiento y habilidades a nivel local; y trabaja con la naturaleza. La soberanía alimentaria es sustancialmente distinta de las políticas existentes de comercio neoliberal y asistencial dirigidas a la “seguridad alimentaria” mundial. Estas políticas son exclusivistas, insensibles a aquellos que producen la comida; silenciosas sobre dónde y cómo se cultiva o consume; y se ha demostrado – desde los 70 – su fracaso.

Los gobiernos e instituciones internacionales deben respetar y adoptar la soberanía alimentaria.

4. Creemos que el Derecho a la Comida está por encima de los acuerdos comerciales y otras políticas internacionales. En la emergencia alimentaria actual, las negociaciones mercantiles relacionadas con la comida y la agricultura deben detenerse; y debe empezar el trabajo para un nuevo diálogo sobre comercio bajo el auspicio de la ONU.

Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el FMI, el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, y el paradigma del libre comercio han socavado las economías locales y nacionales, han erosionado el medioambiente y han perjudicado los sistemas locales de alimentación, dando como resultado la actual crisis de los alimentos. Las políticas neoliberales de comercio también han reforzado los agro-negocios multinacionales y han facilitado los beneficios imprevistos. El *dumping* (competencia desleal) de comida y las exportaciones a precios artificialmente bajos han destruido también los sistemas locales, y deben terminar. Las instituciones financieras internacionales y la OMC han forzado al Sur global a cerrar las juntas de mercado y a suspender los mecanismos para la estabilización del mercado y las garantías de precios para los productores de alimentos. Los gobiernos han sido forzados a abolir las reservas de alimentos y a eliminar los controles a la importación. Así, es necesaria la intervención del Estado en el mercado para garantizar el derecho a la comida y asegurar la producción de alimentos y la economía de los pequeños productores. Por lo tanto, deben terminar las negociaciones del TLC, EPA y la OMC sobre el Acuerdo de Agricultura. Estas negociaciones están dañando a la gran mayoría de los productores de alimentos. Necesitamos urgentemente un nuevo acercamiento al comercio internacional de comida y agricultura. Este planteamiento debe basarse en el derecho de los países a decidir su nivel de auto-suficiencia y apoyo a la producción sostenible para consumo doméstico. Las discusiones para lograr este nuevo régimen comercial, basado en las diversas necesidades de los pueblos y las sociedades y en la preservación del medio natural, deberían realizarse dentro del sistema de la ONU.

5. Insistimos que el derecho de gobiernos de intervenir y de regular para alcanzar soberanía alimentaria, se articule. Los gobiernos nacionales deben tomar su responsabilidad, controlar y hacer retroceder a las elites y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico. Los países deben aumentar su nivel de auto-suficiencia en alimentos tanto como puedan y para alcanzarlo y deben tomarse las siguientes medidas:

- respetar, proteger y cumplir con el derecho a la alimentación adecuada, entre otros derechos;
- Aumentar el presupuesto de ayuda a la producción alimentaria basado en los/las campesinos/as;
- Aplicar una genuina reforma agraria para dar acceso a la tierra y a otros recursos productivos a los/as campesinos/as sin tierra y otros grupos vulnerables;
- Garantizar el acceso a créditos a los/as campesinos/as y otros pequeños productores;
- Eliminar todas las barreras que impiden guardar o intercambiar semillas a los/las campesinos/as y pequeños agricultores entre comunidades, países y continentes;
- Reforzar la investigación liderada por campesinos/as y apoyar la capacidad de construcción autónoma;
- Mejorar las infraestructuras para que los/as campesinos/as y pequeños agricultores puedan acceder a los mercados locales;

- Desarrollar estrategias con los/as campesinos/as y otras organizaciones apropiadas para gestionar peligros o emergencias específicos;
 - Garantizar a los consumidores marginados el acceso a la comida doméstica y – si no hay disponible – a comida traída de los excedentes de regiones vecinas.
6. **Rechazamos los modelos de la Revolución Verde. Los tecno-apaños tecnocráticos no son la respuesta para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural.** La agricultura y la pesca industrializadas no son sostenibles. La *Evaluación Internacional del Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD)* muestra claramente la necesidad de un gran cambio en el modelo actual de investigación y desarrollo. Este informe muestra que los gobiernos (Sur y Norte) han abandonado a voluntad y trágicamente la agricultura y el desarrollo rural, especialmente la agricultura de pequeña escala y la pesca artesanal, desde la última crisis global de los alimentos. Esta actitud parece que va cambiando en tanto que la emergencia actual se despliega. Sin embargo, el nuevo interés en la agricultura permanece fundamentalmente erróneo, pues algunas fundaciones privadas de EE.UU., junto con agro-negocios globales, están presionando a los gobiernos nacionales y a los sistemas de investigación internacional para que sigan la así llamada “revolución verde” en África y en todos los lugares; basándose en apaños tecnológicos rápidos y políticas de mercado fracasadas, más que en decisiones de política social. Los gobiernos, las instituciones de investigación y otros donantes deben aprender de este estudio; cambiar la dirección y apoyar las producciones de cultivos sostenibles de pequeña escala y de ganadería y pesca, en base a las necesidades expresadas por las comunidades locales. Los programas liderados por campesinos/pescadores conducirán a una auto-suficiencia local y nacional. Específicamente, los gobiernos que asisten al Tercer Forum de Alto Nivel sobre la Efectividad de la Ayuda en Ghana, en septiembre, deberían rechazar los modelos filantro-capitalistas de una nueva revolución verde; y deberían reafirmar el papel central de los pueblos y gobiernos en establecer la política y el sistema práctico para su desarrollo.
7. **Apoyamos una estrategia global para la conservación y un uso sostenible de la biodiversidad agrícola que priorice la participación de los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores.** La diversidad biológica en la agricultura es un requisito previo para asegurar las provisiones de alimentos. La enorme pérdida de diversidad, el uso de OMG y las patentes de semillas y genes hacen que la producción de alimentos sea vulnerable. Para apoyar a los pequeños agricultores que desarrollan sistemas de producción resistentes y bio-diversos, debemos trabajar juntos para salvaguardar los agro-ecosistemas, las especies y la diversidad genética que puede adaptarse en la granja a nuevos desafíos como el cambio climático. La Cumbre sobre la Alimentación de Roma debería alentar a los gobiernos, a la FAO, a la Convención sobre Biodiversidad y a la Fundación para la Diversidad Global de Cultivos, a proporcionar un apoyo financiero masivo e inmediato, *in-situ* y en la granja, a la conservación y mejora de cultivos y ganado, liderada por campesinos/as.
8. **Participaremos en el desarrollo de una estrategia integral local/global para responder al cambio climático.** El cambio climático está ya causando grandes pérdidas en la producción de alimentos y está devastando las vidas de millones de personas incluso lo de los emigrantes. El futuro es incierto, pero la mayoría de estudios indican que el cambio climático será más perjudicial para los pueblos y sistemas alimentarios de los países tropicales y subtropicales que para los países de clima templado. Hay una necesidad urgente de cortar con la emisión de gases con efecto invernadero al menos un 80% para el 2030.

Esto es principalmente responsabilidad de los países industrializados. El Sur del globo también debe adoptar políticas y prácticas diferentes para la producción de energía. En agricultura, el modelo industrial de altos insumos de combustible para la producción y el transporte es una causa principal de las emisiones de CO₂. El desarrollo de la producción alimentaria campesina sostenible basada en los recursos locales es una solución clave para reducir esas emisiones. Además, en cualquier caso, los países industriales contaminantes deben aceptar responsabilidades por la destrucción de nuestro medio natural y de los sistemas alimentarios, y deben compensarlo a un nivel – no menos de un 1% de su PIB anual - que permitiría ayudar aliviar el daño y el desarrollo más a fondo de sistemas sostenibles y adaptables de producción de alimentos y energía.